



350.195.15

Yopal, 01 de noviembre de 2023

Señores
EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C
notificacionesjudiciales.laequidad@laequidadseguros.coop
VÍCTOR ANDRÉS GÓMEZ HENAO
victor.gomez@vgenlacelegal.com
BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: Notificación Resolución No. 02227 de fecha 01 de noviembre de 2023.


Cordial Saludo,


En cumplimiento del artículo 362 del Estatuto Tributario del Departamento de Casanare, y con el propósito de que surta la notificación de la Resolución No. 02227 de fecha 01 de noviembre de 2023, por la cual se resolvieron las excepciones dentro del proceso de Cobro Coactivo No. 01093-2022, adelantado en contra de EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C identificada con Nit. No. 860.028.415-5.

Así mismo, se le informa que contra la misma procede únicamente el recurso de reposición en los términos del artículo 618 del Estatuto Tributario Departamental, ante el Director de Cobro Coactivo del Departamento de Casanare, dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

Atentamente,


NESTOR JOSE RINCON CONTRERAS
Director Técnico de Cobro coactivo


Revisó: Hugo Quintero
Profesional Universitario


Proyectó: David Verano
Profesional de Apoyo Cto No. 1269 de 2023

Anexo: diez (10) folios



RESOLUCIÓN No. 02227 DE 2023

“Por la cual se resuelven las excepciones presentadas en contra del mandamiento de pago No.00648 del 21 de junio de 2023”

350 200 20

EL DIRECTOR TÉCNICO DE COBRO COACTIVO DEL DEPARTAMENTO DE
CASANARE

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las conferidas por el artículo 23 del Decreto No. 0323 del 01 de noviembre de 2019 y los Decretos No. 0016 del 01 de enero de 2020 y 0333 del 15 de noviembre de 2022, y

CONSIDERANDO

Que la Dirección de Cobro Coactivo adelanta proceso de ejecución en contra de CONSORCIO VIAL LA TURUA, identificada con Nit. No. 901224094-2, representada legalmente por Juan Carlos Jubiz Rivera identificado con cédula de ciudadanía No. 72.287.675 y EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C identificada con Nit. No. 860.028.415-5, por concepto del no pago intereses moratorios causados desde el día 14 de enero de 2021 al 22 de julio de 2022, impuestos mediante la Resolución No. 0236 de 29 de noviembre de 2020.

Que el Director de Cobro Coactivo del Departamento de Casanare para exigir el cobro, profirió el mandamiento de pago mediante auto, ordenando la cancelación de la obligación pendiente por el no pago de los intereses respectivos, de la sanción impuesta mediante Resolución No. 0236 de 29 de noviembre de 2020.

Que el día 28 de junio de 2023, se envió a través del correo electrónico al buzón oficial de EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C, la citación para notificación del auto mandamiento de pago, razón por el cual la entidad ejecutada representada legalmente por el abogado Néstor Raúl Hernández Ospina identificado con cédula de ciudadanía número 94.311.640, mediante apoderada solicito al buzón interno de este despacho de fecha 11 de julio de 2023, notificación del mandamiento de pago No.00648 el día 21 de junio de 2023, así mismo solicito el traslado o enlace/link del expediente.

Que el día 31 de agosto de 2023, se envió a través del correo electrónico al buzón oficial de CONSORCIO VIAL LA TURUA, la citación para notificación del auto mandamiento de pago, sin obtener pronunciamiento alguno por parte de la entidad; del mismo modo se procede por parte del despacho a notificar el auto mandamiento de pago el día 12 de Septiembre de 2023, como se demuestra la administración agoto los requisitos en lo que tiene que ver respecto a notificación sin que la entidad ejecutada se pronunciara.

Que el señor Néstor Raúl Hernández Ospina identificado con cédula de ciudadanía número 94.311.640, en calidad y representante legal de EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C, otorgó poder amplio y suficiente al abogado Víctor Andrés Gómez Henao identificado con cedula de ciudadanía No. 80.110.210, de Bogotá y T.P No.



RESOLUCIÓN No. 02227 DE 2023

“Por la cual se resuelven las excepciones presentadas en contra del mandamiento de pago No.00648 del 21 de junio de 2023”

350 200 20

157.615 del Consejo Superior de la Judicatura, quien estando facultado presentó el día 08 de junio de 2023, escrito de excepciones en contra del mandamiento de pago, dentro del término legal, sustentando su defensa con los siguientes argumentos:

1. Excepción Principal:

• FALTA DE COMPETENCIA.

Expresa el apoderando de la parte ejecutada “el artículo 831 del Estatuto Tributario dispone que, contra el mandamiento de pago, procederá la excepción de “incompetencia del funcionario que lo profirió”. en su escrito trae a colación el artículo 99 del CPACA, los documentos que prestan merito ejecutivo a favor del estado –siempre y cuando en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible-, son los siguientes:

“1. Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley.

2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor del tesoro nacional, o de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero.

3. Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el acto administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad. Igualmente lo serán el acta de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual.

4. Las demás garantías que a favor de las entidades públicas, antes indicadas, se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación.

5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor”.

Continúa el apoderado argumentando que el auto que libro mandamiento de pago, no tiene fundamento en ninguna de los numerales del articulo anteriormente citados. Y que en ese constexto, no es verdad que los artículos 98 a 101 de CPACA le otorguen competencia a la entidad ejecutante para cobrar, por vía coactiva, los intereses moratorios indicados en el mandamiento de pago –y menos en la forma como lo pretende-, pues claramente no se encuentra enlistada dentro de los instrumentos indicados en el articulo 99 ibidem. En consecuencia, la entidad ejecutora debe acudir ante el juez natural a fin de



RESOLUCIÓN No. 02227 DE 2023

“Por la cual se resuelven las excepciones presentadas en contra del mandamiento de pago No.00648 del 21 de junio de 2023”

350 200 20

perseguir el pago de las supuestas obligaciones incumplidas, pues no tiene competencia ni prerrogativa para cobrar coactivamente intereses moratorios”.

2. Excepción subsidiaria:

- **FALTA DE TÍTULO EJECUTIVO.**

Argumenta el peticionario lo siguiente “a pesar de que el auto que libro mandamiento de pago está motivado – de manera insuficiente- con fundamento en la causación de unos intereses de mora, razón por la cual se entiende que el cobro coactivo se adelanta persiguiendo tales rubros causados -supuestamente- por el no pago de un capital que, dicho sea de paso, no se le adeuda a la gobernación de Casanare. En ese contexto y como se indicara, no existe título ejecutivo alguno en contra de la entidad ejecutada y que pueda ser cobrado por vía coactiva. Lo anterior por cuanto, al desconocer que se está ejercitando un cobro coactivo con fundamento en la estimación de unos intereses inexistentes, entonces, mutatis mutandis, se entendería que tal cobro coactivo no descansa en una obligación clara, expresa, exigible y que provenga de la parte ejecutada. Concluye el apoderado de la entidad, y hace referencia nuevamente al artículo 99 del CPACA, los documentos que prestan merito ejecutivo a favor del estado –siempre y cuando en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible-, son los siguientes”.

En resumen y a manera de conclusión el peticionario centra todo su argumento, alegando unas excepciones principales y subsidiarias; falta de competencia, falta de título ejecutivo basándose en el artículo 99 del CPACA.

ANÁLISIS DEL DESPACHO

Este Despacho procede a motivar su decisión de conformidad en sus aspectos de derecho y de hecho dentro de la oportunidad que establece el artículo 832 del Estatuto Tributario Nacional, concordante con el artículo 615 del Estatuto Tributario del Departamento de Casanare.

En primer lugar, tenemos que indicar que la notificación del mandamiento de pago conforme se estipula en el Estatuto Tributario Nacional, se realizó conforme a lo dispuesto en los artículos 826 y 565 y s.s. en concordancia con los artículos 602, 603, 604 y 361 y s.s. del Estatuto Tributario del Departamento de Casanare; que en su tenor reza: *artículo 826. Mandamiento de pago. “El funcionario competente para exigir el cobro coactivo, producirá el mandamiento de pago ordenando la cancelación de las obligaciones pendientes más los intereses respectivos. Este mandamiento se notificará personalmente*



RESOLUCIÓN No. 02227 DE 2023

“Por la cual se resuelven las excepciones presentadas en contra del mandamiento de pago No.00648 del 21 de junio de 2023”

350 200 20

al deudor, previa citación para que comparezca en un término de diez (10) días. Si vencido el término no comparece, el mandamiento ejecutivo se notificará por correo. En la misma forma se notificará el mandamiento ejecutivo a los herederos del deudor y a los deudores solidarios.

Cuando la notificación del mandamiento ejecutivo se haga por correo, deberá informarse de ello por cualquier medio de comunicación del lugar. La omisión de esta formalidad, no invalida la notificación efectuada.

PARAGRAFO. El mandamiento de pago podrá referirse a más de un título ejecutivo del mismo deudor”; lo anterior no impide que el deudor solicite copias durante el proceso en ese contexto y habiéndose surtido la notificación se propusieron las excepciones.

Dicho lo anterior, se advierte que contra el mandamiento de pago proceden las excepciones contempladas en el artículo 831 Estatuto Tributario Nacional, concordante con el artículo 614 del Estatuto Tributario del Departamento de Casanare, define las excepciones dentro del proceso de cobro coactivo de la siguiente manera:

“Artículo 614. Excepciones. Contra el mandamiento de pago procederán las siguientes excepciones:

- 1. El pago efectivo.*
- 2. La existencia de acuerdo de pago.*
- 3. La falta de ejecutoria del título.*
- 4. La pérdida de ejecutoria del título por revocación o suspensión provisional del acto administrativo, hecha por autoridad competente.*
- 5. La interposición de demandas de restablecimiento del derecho o de proceso de revisión de impuestos, ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.*
- 6. La prescripción de la acción de cobro, y*
- 7. La falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió.”*

Por tal razón en ejercicio del derecho de defensa y contradicción la EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C, mediante apoderado judicial propuso las excepciones de la falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió; la cual se abordará en la forma que fueron propuestas.



RESOLUCIÓN No. **02227** DE 2023

“Por la cual se resuelven las excepciones presentadas en contra del mandamiento de pago No.00648 del 21 de junio de 2023”

350 200 20

a. Falta de Competencia

En primer lugar tenemos que referirnos a la competencia del funcionario que lo profirió según la excepción principal propuesta por el apoderado de la entidad EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C en efecto, la competencia es la facultad o el poder jurídico que tiene una autoridad para ejercer determinada función, razón por la cual en el entendido que la incompetencia o falta de competencia se materializa cuando el autor profiere un acto pese que a no tenía el poder legal para expedirlo, es decir, cuando la decisión se toma si estar facultado legalmente para ello. En otras palabras, dicho reproche se configura cuando el acto es proferido por fuera de las competencias legales y constitucionales atribuidas al servidor público o la Corporación respectiva, esto es, por fuera de las atribuciones que el ordenamiento jurídico ha otorgado; en ese contexto hay que tener en cuenta lo indicado por el artículo 560 del Estatuto Tributario Nacional que define la competencia en materia de determinar el ejercicio de las funciones en tal caso es viable hacer alusión al artículo anteriormente mencionado, “*Son competentes para proferir las actuaciones de la administración tributaria los funcionarios y dependencias de la misma, de acuerdo con la estructura funcional que se establezca en ejercicio de las facultades previstas en el numeral 16 del artículo 189 de la Constitución Política*”; dicho lo anterior, ello autoriza a concluir que el funcionario quien emitió el título está plenamente facultado para ejecutar y/o cobrar los intereses moratorios objeto de esta controversia.

b. Falta de Título Ejecutivo

En segundo lugar se aclara que el apoderado judicial del EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C en la exposición de argumentos se refiere a la excepción subsidiarias a la falta de título ejecutivo; Así las cosas, es oportuno indicar que la finalidad de un proceso coactivo es obtener el recaudo de una obligación clara, expresa y exigible contenida en un título ejecutivo debidamente ejecutoriado; para el caso que nos ocupa se puede observar que existen sendos actos administrativos que sirven como base para el recaudo coactivo, los cuales se encuentran debidamente ejecutoriados; y se relacionan a continuación:

La administración Departamental sancionó y ordenó mediante Resolución No. 0236 de fecha 29 de diciembre de 2020, emanada de la Oficina Asesora Jurídica del Departamento de Casanare, por la cual se profiere fallo dentro del procedimiento adelantado por presunto incumplimiento en la ejecución de un contrato, en contra del CONSORCIO VIAL LA TURUA, identificada con Nit. No. 901224094-2, representada legalmente por Juan Carlos Jubiz Rivera identificado con cédula de ciudadanía No. 72.287.675, por el incumplimiento total con la ejecución del contrato de obra No. 2135 de fecha 01 de noviembre de 2018; teniendo en cuenta la anterior resolución se ordenó hacer efectiva la cláusula penal pactada en el contrato por un valor de ochenta y nueve



RESOLUCIÓN No. 02227 DE 2023

“Por la cual se resuelven las excepciones presentadas en contra del mandamiento de pago No.00648 del 21 de junio de 2023”

350 200 20

millones novecientos treinta y seis mil ciento noventa y nueve pesos con ochenta y tres Centavos (\$ 89.936.199,83), y hacer efectivo el amparo de buen manejo y correcta inversión del anticipo, por el 100% de su valor, es decir la suma de trescientos treinta y siete millones cuatrocientos noventa y seis mil ciento ochenta y siete pesos con cincuenta centavos (\$337.496.187,50), para un valor total de cuatrocientos veintisiete millones cuatrocientos treinta y dos mil trescientos ochenta y siete pesos con treinta y tres centavos(\$427.432.387,33).

Ahora bien, el Departamento de Casanare conforme al ordinal sexto de la resolución No. 0236 de fecha 29 de diciembre de 2020, requirió al contratista CONSORCIO VIAL LA TURUA, identificada con Nit. No. 901224094-2, representada legalmente por Juan Carlos Jubiz Rivera identificado con cédula de ciudadanía No. 72.287.675, para que dentro del término de diez (10) días contados a partir del recibo de la comunicación efectuó el pago de las sumas aquí dispuestas. En el evento de no cumplir requiríase a la compañía de garante EQUIDAD SEGUROS, para que asuma el pago, otorgándole el plazo de un (1) mes contados a partir del día siguiente al recibo de dichas comunicaciones cancelaran el total de la sanción impuesta mediante la Resolución No. 0236 de 29 de noviembre de 2020.

Que la EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C identificada con Nit. No. 860.028.415-5; pagó la suma de cuatrocientos veintisiete millones cuatrocientos treinta y dos mil trescientos ochenta y siete pesos con treinta y tres centavos M/cte (\$427.432.387,33), solo hasta el día 21 y 22 de julio de 2022, valor que debió cancelar el día 14 de enero de 2021, razón por la cual se generaron intereses moratorios los cuales ascienden a la suma de ciento noventa y seis millones ochocientos seis mil pesos M/cte (\$196.806.000,00).

En relación con lo anterior; el artículo 1080, del Código de Comercio expresa lo siguiente; *“Plazo para el pago de la indemnización e intereses moratorios. El asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077 del Código de Comercio. Vencido este plazo, el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad”*, en resumidas cuentas las aseguradoras están obligadas al pago de la indemnización un mes después de que recibe la comunicación por el cual se requirió para que realizará el respectivo pago, es decir que para el caso que nos ocupa hasta el día 14 de enero de 2021.

Así mismo, el artículo 1608 del Código Civil, establece que transcurrido el plazo o término para el pago de una obligación sin que se hubiere este realizado en la oportunidad debida, por esa sola razón, se incurre en mora, salvo que la ley o el contrato exijan



RESOLUCIÓN No. 02227 DE 2023

"Por la cual se resuelven las excepciones presentadas en contra del mandamiento de pago No.00648 del 21 de junio de 2023"

350 200 20

requerimiento especial para tal efecto y no se hubiere renunciado. Este precepto, dispone que el "deudor está en mora. 1). Cuando no ha cumplido la obligación dentro del término estipulado; salvo que la ley, en casos especiales, exija que se requiera al deudor constituirlo en mora."

Es decir, el interés moratorio es la suma que se paga como sanción para quien debe pagar y como compensación para quien debe recibir el pago, por no realizar el pago de un crédito o una deuda dentro de la oportunidad prevista, ya sea legalmente o contractualmente.

En tal sentido, los actos administrativos en firme que contienen una obligación clara expresa y exigible pueden ejecutarse de forma inmediata por la autoridad administrativa competente, es decir, que una vez se resuelvan los recursos interpuestos contra el acto administrativo, o cuando no procede recurso, o se renuncia a ellos, la administración procederá a materializar lo dispuesto en el acto administrativo ejecutoriado, a través del procedimiento administrativo de cobro coactivo, conforme lo establece el artículo 89 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 87 de la Ley 1437 de 2011.

Lo anterior se sustenta en el tenor del artículo 828 del Estatuto Tributario Nacional, concordante con el artículo 609 del Estatuto Tributario del Departamento de Casanare, el cual establece cuales son los actos de la Administración Departamental que debidamente ejecutoriados prestan merito ejecutivo.

"Artículo 609. Títulos Ejecutivos. Prestan merito ejecutivo:

1. Las liquidaciones privadas y sus correcciones, contenidas en las declaraciones tributarias presentadas, desde el vencimiento de la fecha para su cancelación.

2. Las liquidaciones oficiales ejecutoriadas.

3. Las garantías y cauciones prestadas a favor de la Departamento para afianzar el pago de las obligaciones tributarias, a partir de la ejecutoria del acto de la Administración que declare el incumplimiento o exigibilidad de las obligaciones garantizadas.

4. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas, que decidan sobre las demandas presentadas en relación con los impuestos, anticipos, retenciones, sanciones e intereses que administra el Departamento de Casanare.

5. Los demás actos de la Administración Departamental debidamente ejecutoriados, en los cuales se fijen sumas liquidas de dinero a favor del fisco Departamental.



RESOLUCIÓN No. 02227 DE 2023

"Por la cual se resuelven las excepciones presentadas en contra del mandamiento de pago No.00648 del 21 de junio de 2023"

350 200 20

Para dar inicio al proceso de cobro coactivo, la administración constató la existencia de obligaciones a cargo de EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C, y a favor del tesoro departamental, las cuales constan en un títulos ejecutivos que demuestran que son expresas, claras y actualmente exigibles, como se puede dilucidar de los actos administrativos que se relacionaron anteriormente, los cuales fueron notificados a la entidad ejecutada.

En relación con lo anterior, el artículo 829-1 del Estatuto Tributario Nacional establece que durante el procedimiento de cobro coactivo no podrán debatirse cuestiones que debieron ser objeto de discusión en la vía gubernativa porque, para realizar el cobro forzoso de una obligación tributaria, es necesario que el acto que sirve de título ejecutivo esté en firme; así lo sostiene la doctrina jurisprudencial del Honorable Consejo de Estado¹:

"Por su parte, el artículo 831 señala que contra el mandamiento de pago procede, entre otras, la excepción de falta de título ejecutivo, cuya finalidad es impedir que se adelante el procedimiento de cobro coactivo cuando la deuda que se pretende ejecutar no se ha determinado en alguno de los documentos a los que el ordenamiento reconoce como título ejecutivo. Es decir que, según esta excepción prosperará cuando no se cumplan los presupuestos del artículo 828 del Estatuto Tributario (...) De acuerdo con lo expuesto, no prosperará la excepción de falta de título ejecutivo cuando la liquidación oficial objeto de cobro está debidamente ejecutoriada. La ejecutoria de los actos administrativos tributarios, dentro de los cuales se encuentran las liquidaciones oficiales, se regula por el artículo 829 del Estatuto Tributario. De acuerdo con esta disposición, los actos quedan en firme cuando (i) contra ellos no proceda recurso alguno, o (ii) procediendo alguno no se haya ejercitado en tiempo o debidamente, o (iii) habiendo sido ejercido se desista del recurso, o (iv) haya sido resuelta con carácter definitivo cualquier controversia respecto del acto en vía gubernativa o judicial. En definitiva, cuando concluya toda litispendencia abierta o posible. Con base en las normas expuestas, en sentencia del 26 de julio de 2018 (exp. 22031, CP: Julio Roberto Piza Rodríguez), esta Sección concluyó que, respecto del cobro de liquidaciones oficiales, la excepción de falta de título ejecutivo solo podría alegarse en aquellos casos en los que cursa un debate formal y debidamente establecido contra el acto administrativo de determinación del tributo o cuando se puede establecer mediante recurso o demanda porque están habilitados los términos para adelantar esas actuaciones, pero no cuando lo que se pretende es formular al interior del procedimiento del cobro coactivo una nueva impugnación sobre el contenido y legalidad del acto de determinación oficial del tributo. 3- En el caso bajo examen consta que, antes del inicio del procedimiento de cobro coactivo, mediante escrito del 27 de enero de 2016, la actora solicitó la declaratoria del silencio administrativo positivo porque no fue notificada de la

¹ Consejo de Estado, Sección Cuarta, Rad. 63001-23-33-000-2016-00293-01(23906); Sentencia del 29 de abril de 2020, MP. JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ (E).



RESOLUCIÓN No. 02227 DE 2023

“Por la cual se resuelven las excepciones presentadas en contra del mandamiento de pago No.00648 del 21 de junio de 2023”

350 200 20

resolución que resolvió el recurso de reconsideración en el término de un año. Sin embargo, dicha petición fue negada por la Dian (...) De acuerdo con lo expuesto en la consideración 2, la actora debió ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para obtener la invalidez de ese acto administrativo, o de la Resolución (...) que negó el recurso de reconsideración, pues ambos actos administrativos se presumen legales. Pero esto no ocurrió, sino que la actora se limitó a formular la excepción de falta de título ejecutivo contra el mandamiento de pago luego de iniciado el procedimiento de cobro coactivo (...) De esta forma, la actora está tratando de debatir la legalidad de la liquidación oficial que sirve de título ejecutivo durante el procedimiento administrativo de cobro coactivo por cuestiones que debieron plantearse en el trámite de determinación del tributo, contrariando lo dispuesto en el artículo 829-1 del Estatuto Tributario...

En síntesis, la excepción de la *falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió* alegada por EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C, no está llamada prosperar, por cuanto se pretende abrir nuevamente el debate jurídico sobre la legalidad del acto de determinación, que como enseña la doctrina jurisprudencial reciente, debió ser demandada a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, a efectos de obtener la invalidez del acto de determinación y del acto que resuelve el recurso de reconsideración, si es el caso.

Que, por lo indicado, se deduce que no es jurídicamente viable acceder a las pretensiones del accionante, ya que los actos administrativos emitidos por esta entidad gozan de legalidad y plena validez jurídica, conforme los principios al debido proceso, publicidad, defensa y presunción de buena fe.

En mérito de lo expuesto este Despacho,

RESUELVE

ARTÍCULO 1: Declarar no probadas las excepciones de *la falta de título ejecutivo o incompetencia del funcionario que lo profirió*, propuestas el día 08 de agosto de 2023, por el señor Víctor Andrés Gómez Henao identificado con cedula de ciudadanía No. 80.110.210, en calidad y representante legal de EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C; dentro del proceso de Cobro Coactivo No. 01093-2023.

ARTÍCULO 2: Ordenar seguir adelante con la ejecución en contra EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C identificada con Nit. No. 860.028.415-5, dentro del proceso de Cobro Coactivo No. 01093-2023, conforme se ordenó en el mandamiento de pago No.00648 de fecha 21 de junio de 2023; y en firme la presente resolución se procederá a liquidar el crédito y las costas de la actuación.



RESOLUCIÓN No. 02227 DE 2023

“Por la cual se resuelven las excepciones presentadas en contra del mandamiento de pago No.00648 del 21 de junio de 2023”

350 200 20

ARTÍCULO 3: Notificar la presente Resolución, conforme a lo establecido en el artículo 361 del Estatuto Tributario del Departamento de Casanare, concordante con el artículo 565 del Estatuto Tributario Nacional, a través de notificación electrónica, advirtiéndole al peticionario que contra la misma procede únicamente el recurso de reposición en los términos del artículo 618 del Estatuto Tributario Departamental, ante el Director de Cobro Coactivo del Departamento de Casanare, dentro del mes siguiente a la notificación de esta resolución.

ARTÍCULO 4: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su notificación.

NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE

01 NOV 2023

Dada en Yopal a los,

NÉSTOR JOSÉ RINCÓN CONTRERAS
Director Técnico de Cobro Coactivo

Revisó: Hugo Quintero
Profesional Universitario

Proyectó: David Verano
Profesional de Apoyo Cto No. 1269 de 2023